



número 116 - Marzo 2007

NUESTRA OPINIÓN

- Biocombustibles: algo que podría ser positivo convertido en grave amenaza para el Sur

COMUNIDADES Y BOSQUES

- Brasil: campesinos del MST ocupan granja camaronera
- Camerún: cuando las mujeres se movilizan en torno al moabi
- Ecuador: el Pueblo Awá y su territorio entre intereses políticos y presiones económicas
- India: el movimiento indígena de Jharkhand impugna los planes de desarrollo industrial que amenazan con destruir los bosques, las tierras cultivables y la forma de vida de los Adivasi
- Nigeria: las mujeres de Idheze cierran instalaciones petroleras de Agip

COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES

- Brasil: un panorama de los monocultivos de eucaliptos
- Camboya: los indígenas Jarai inician acciones legales para reclamar su tierra
- Camerún: la dura realidad de las plantaciones de palma aceitera
- Colombia: empresa de celulosa irlandesa-holandesa acusada de graves delitos sociales y ambientales
- Swazilandia: credibilidad del FSC toca fondo con certificación de Sappi

AGROCOMBUSTIBLES

- El etanol extraído de árboles: un remedio peor que la enfermedad
- Brasil: los agrocombustibles representan un nuevo ciclo de expansión de la devastación de las regiones amazónicas y del Cerrado

COMERCIO DE CARBONO

- Lo indecente del comercio de carbono

NUESTRA OPINIÓN

- **Biocombustibles: algo que podría ser positivo convertido en grave amenaza para el Sur**

Nadie en su sano juicio puede acusar al Presidente George W. Bush de que se preocupa demasiado por el cambio climático. Su currículum en la materia es intachable y tanto su apoyo irrestricto a la industria petrolera como sus guerras petroleras han significado importantes contribuciones al calentamiento global. Por si quedaran dudas, su persistente negativa a firmar el Protocolo de Kioto lo convierte en el líder indiscutido de quienes aportan más a la destrucción del clima del planeta Tierra.

Es por ello que llama poderosamente la atención su súbito interés en los biocombustibles. En efecto, durante su

reciente visita a varios países de América Latina (Brasil, Uruguay, Colombia, Guatemala y México) ese fue el punto más claro en la agenda de una gira que fue definida por alguna prensa como "la diplomacia del etanol". Es más, poco antes de iniciar su gira visitó las instalaciones de una empresa vinculada a la industria del etanol, donde hizo referencia -entre otras- "a tecnologías que nos permitirán convertir astillas de madera en combustibles que hagan funcionar automóviles".

Este súbito interés de Bush en un tema al parecer tan alejado a sus intereses y preocupaciones sirve para comprender mejor las razones por las que tantos gobiernos y agencias del Norte están impulsando el desarrollo de los biocombustibles en tantos países del Sur.

A diferencia de otros gobernantes del Norte, Bush ni siquiera intenta presentarse como "verde". Las razones que esgrime son fundamentalmente estratégicas y económicas. Afirma que el impulso a los biocombustibles es "un muy importante objetivo nacional", que consiste en "pasar a ser menos dependientes de combustibles provenientes del extranjero y por ende asegurar que nuestros intereses estratégicos nacionales estén mejor protegidos y que nuestros intereses en materia de seguridad económica estén más intactos". En lo económico dice que "A medida que los precios de los hidrocarburos suben, tiene sentido que seamos capaces de lograr que fuentes alternativas de energía lleguen al mercado lo más rápido posible".

Todo ese razonamiento seguramente ya lo han hecho los gobiernos de la mayoría de los países del Norte –en particular los europeos- lo que lleva a dudar acerca de cuán "verdes" son sus intenciones.

Desde el punto de vista de muchos gobiernos del Sur, los biocombustibles son percibidos simplemente como un nuevo producto a ser exportado; como una "oportunidad". Ello, unido a los múltiples apoyos que para su desarrollo están recibiendo de agencias de cooperación y organismos multilaterales, ha resultado en la adopción de políticas y medidas concretas para su promoción en decenas de países, sin tomar en cuenta sus posibles consecuencias sociales, políticas, económicas y ambientales.

En contraposición, las organizaciones populares del Sur los ven como una grave amenaza para la subsistencia de la gente. En efecto, los planes gubernamentales implican que millones de hectáreas de tierras hoy productoras de alimentos van a ser destinadas a la producción de combustibles para alimentar automóviles. Cultivos como el maíz, la soja, la caña de azúcar, la palma aceitera y muchos otros van a ser convertidos en etanol o biodiesel. En palabras del propio Bush, ya está prevista la conversión de madera en etanol, lo que significa la amenaza de la plantación de aún más monocultivos de árboles de rápido crecimiento para alimentar autos. Todo ello se hará a expensas de tierras productoras de alimentos y de bosques.

En ese contexto, la reciente reunión llevada a cabo en Malí por la soberanía alimentaria, donde participaron representantes de más de 80 países se expidió claramente contra "los 'Desiertos Verdes' de los monocultivos de biocombustibles industriales y otras plantaciones" ([ver 1](#)). También lo hicieron las mujeres allí reunidas en su declaración sobre soberanía alimentaria enfatizando que "Los monocultivos, entre ellos, los empleados para los agro-combustibles ... tienen efectos negativos sobre el ambiente y sobre la salud humana ..." ([ver 2](#))

En otro contexto, el Tribunal Permanente de los Pueblos (ex Tribunal Russell) se reunió recientemente en Cacarica, Colombia y en su dictamen se incluyeron graves acusaciones a empresas productoras de aceite de palma. Entre otras cosas, se las acusó (y al gobierno colombiano) de haber sembrado palma en "territorios colectivos de comunidades afrocolombianas, operaciones que fueron posibles gracias a la comisión e impunidad de más de 113 crímenes de Lesa Humanidad, 13 desplazamientos forzados, 15 casos de torturas, 17 detenciones arbitrarias, 19 saqueos a caseríos, 14 incursiones de tipo paramilitar, agresiones a la zona humanitaria, 4 asesinatos o ejecuciones extrajudiciales y la llamada 'desmovilización' que ha posibilitado el desarrollo de nuevas amenazas de muerte y de control sobre la población". ([ver 3](#))

Claro que eso no habrá preocupado demasiado a los presidentes colombiano y norteamericano cuando se reunieron recientemente, ya que ambos han sido y siguen siendo socios en la masacre que se lleva a cabo en ese país bajo el nombre de Plan Colombia. El resultado final será para ellos positivo: la producción de biodiesel de palma. Pero es bueno que los futuros consumidores de este combustible reflexionen sobre el testimonio de una mujer que dijo ante el Tribunal que: "la palma aceitera está abonada por la sangre de nuestros hermanos, amigos y familiares", agregando que "no tenemos donde trabajar porque el territorio está cubierto de palma".

Esa es la verdadera cara que se esconde tras los llamados "biocombustibles" en el Sur. Bio significa vida. Sin embargo, el cultivo de estos combustibles significa muerte. Muerte de comunidades enteras, muerte de culturas, muerte de personas, muerte de la naturaleza. Llámense plantaciones de palma aceitera o de eucaliptos, trátense de monocultivos de caña de azúcar o de soja transgénica, los impulsen gobiernos "progresistas" o "conservadores". Muerte.

Lo que podría haber sido algo positivo (la sustitución de combustibles fósiles por combustibles derivados de biomasa) ha sido convertido, por obra y gracia de determinados intereses del Norte, en una de las más graves amenazas para la supervivencia de millones de personas en el Sur. Para que los biocombustibles vuelvan a ser positivos debe cambiarse totalmente el enfoque: debe pasarse de la producción para un mercado global al abastecimiento local, del monocultivo a la diversidad, del monopolio a la descentralización, de lo social y ambientalmente destructivo al respeto por la gente y la naturaleza. Algo que no está en el pensamiento de las empresas, pero que sí es posible encontrar en la cabeza de las personas, tanto del Sur como del Norte. A todas y todos ellos apelamos para que protejan la vida y ayuden a detener este proceso que –bajo un manto "ecológico", es sinónimo de muerte.

(1) La declaración completa se encuentra disponible en:
http://www.wrm.org.uy/actores/FSM/Declaracion_Nyeleni.html

(2) La declaración completa se encuentra disponible en:
http://www.wrm.org.uy/temas/mujer/Declaracion_Mujeres_Nyeleni.html

(3) La declaración completa se encuentra disponible en:
http://www.wrm.org.uy/paises/Colombia/Presentacion_Tribunal.html

[inicio](#)

COMUNIDADES Y BOSQUES

- **Brasil: campesinos del MST ocupan granja camaronera**

El problema de la pérdida de territorios por parte de campesinos y pueblos indígenas a favor de proyectos industriales tiene varias puntas en Brasil, y el Movimiento de los Sin Tierra (MST) lleva adelante una lucha para contrarrestar ese proceso.

Hemos informado acerca de las sucesivas ocupaciones de tierras plantadas con extensos monocultivos de eucaliptos para la producción de celulosa –una de dichas ocupaciones protagonizada recientemente por mujeres de Vía Campesina/MST en ocasión del Día Internacional de la Mujer.

También los manglares se ven afectados por proyectos depredadores. La cría de camarones en cautiverio es un negocio extractivista que implica la destrucción de los manglares. En respuesta a esa situación y en protesta por la lentitud del proceso de reforma agraria en el estado, el 21 de enero de este año aproximadamente 150 familias vinculadas al MST invadieron la granja camaronera Qualibras, ubicada en Itapipoca, región costera del Estado de Ceará.

El MST denunció con la ocupación un acto más de violencia del agronegocio en el país, del grupo Qualibrás que

destruye los manglares de la región. De acuerdo con las leyes brasileñas, se trata de un crimen ambiental grave, a causa de la importancia que tienen los manglares, entre otras cosas, en la cadena alimentaria marina. El Instituto Terramar, de Brasil, denuncia que las granjas camaroneras violan las leyes de Ceará, ya que se están construyendo viveros en áreas de preservación permanente. "Un diagnóstico realizado por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) identificó que 75% de las granjas camaroneras de Ceará están construidas en áreas de preservación permanente, en violación de las leyes del Estado".

En los manglares el gran negocio encuentra una gran rentabilidad por el bajo costo de producción que le proporciona el agua abundante y próxima y el movimiento de la marea que contribuye a una reducción considerable de los gastos de bombeo de agua dentro de los tanques.

A pesar de su importancia ambiental y de la legislación, las empresas de cría de camarón en cautiverio continúan expandiendo su negocio: entre 2003 y 2004, la superficie de granjas camaroneras en Brasil pasó de 14.824 a 16.598 hectáreas, en un total de cerca de 1.000 granjas en el país, en comparación con las 20 que existían en la década de 1980.

Mientras el agronegocio avanza sobre los manglares del nordeste del país, los trabajadores se organizan. Las familias que participaron en la ocupación acampan en la región costera del Estado, en lucha por la entrega de tierras y el otorgamiento de títulos. En total hay aproximadamente 1.700 familias, distribuidas en 25 campamentos, muchas de ellas esperando hace más de cinco años la reforma agraria prometida. En 2006, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) tenía como meta el asentamiento de 2.000 familias en el Estado, pero solamente 206 recibieron terrenos. El grupo indígena "Tremembes" también tomó parte en la ocupación, en reclamo de la demarcación de tierras en la zona indígena de Buritis, en Itapipoca.

Pistoleros contratados por la empresa rodearon en la noche del 23 de enero el campamento, tratando de amedrentar a hombres, mujeres y niños, quienes, finalmente, y para evitar un conflicto que pusiese en riesgo la seguridad de las familias, abandonaron la ocupación en la mañana siguiente.

"Salimos con la perspectiva de volver nuevamente, en caso de que el INCRA no resuelva concretamente los problemas de la reforma agraria", afirmó un representante de los sin tierra.

Artículo elaborado en base a información obtenida de: "Brasil: MST ocupa fazenda devastadora de mangues no Ceará", Igor Felipe Santos, <http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/29831>; "MST ocupa fazenda de criação de camarão", Carlos Henrique Camelo, OPovo online, <http://www.opovo.com.br/opovo/ceara/664429.html>; "MST sai de fazenda com ameaças de jagunços no Ceará", CUT, <http://www.cut.org.br/publique/cgi/cqilua.exe/sys/start.htm?infolid=7314&sid=22>

[inicio](#)

- Camerún: cuando las mujeres se movilizan en torno al moabi

El sur de Camerún es rojo y verde. Verde como el bosque de la cuenca del Congo, que respira y late y que ofrece a sus habitantes los recursos bióticos necesarios para la subsistencia; rojo como los caminos polvorientos por los que corren camiones transportando los cuerpos de gigantes del bosque que serán transformados en muebles, parques, puertas, etc. Por las venas abiertas de Camerún fluye su elemento vital hasta el puerto de Douala, donde el vampiro del Norte viene a saciar su sed...

Del bosque nos llegan voces de mujeres. En el sudeste de Camerún hay mujeres que se organizan para mejorar sus condiciones de vida y preservar un árbol mítico: el moabi (*Baillonella toxisperma*). Este gigante del bosque de la cuenca del río Congo está siendo explotado en forma industrial, a un ritmo difícil de determinar pero que afecta a las

poblaciones locales y, en particular, a las mujeres.

Para las poblaciones del sur de Camerún, el moabi tiene considerable importancia. Como "árbol sagrado": tradicionalmente a los ancestros fallecidos se los sentaba al pie del árbol o en un hueco del tronco; de esa forma el moabi encarnaba el poder del difunto. Como "árbol farmacia": su corteza, sus hojas y raíces sirven para preparar más de cincuenta medicinas tradicionales, utilizadas, entre otras cosas, para el tratamiento de dolores menstruales, infecciones vaginales y puerperio. Como "árbol nutricio": sus frutos son comestibles, lo cual, durante la fructificación, reduce el trabajo doméstico de las mujeres; las semillas producen un aceite de buena calidad, que está bajo el control de las mujeres desde la recolección hasta la comercialización, y que representa una de sus principales fuentes de ingresos en las regiones productoras.

La explotación industrial del bosque comenzó en Camerún en los albores del siglo veinte, durante la colonización alemana, en la región litoral, para extenderse luego a todo el país al ritmo de la construcción de las vías férreas. Y, aunque algunos empresarios no encuentren explicación a la disminución de moabis, se puede observar que la distribución de esta especie es inversamente proporcional a la presencia histórica de explotaciones forestales. En efecto, el comercio del moabi resulta lucrativo, por tratarse de una madera de gran calidad para la carpintería y de alto precio en el mercado internacional. Es realmente un producto de lujo, que adorna el interior de yates o quintas en forma de entarimados, ventanas, revestimientos, etc. Para revestir los pisos del Teatro de los Campos Elíseos, en París, se eligió un parqué de moabi...

En Camerún, el comercio internacional de la madera está exclusivamente en manos de firmas extranjeras, mayormente francesas, italianas, libanesas y, desde hace poco, chinas. Sin embargo, el mercado del moabi sigue siendo muy "franco-francés": según estadísticas oficiales, entre 2000 y 2005 el 45% del volumen de moabi fue producido por empresas francesas, y el 71% de la producción se vendió en Francia (el 24% en Bélgica). Es evidente pues que el comercio de moabi coincide perfectamente con los lazos comerciales del país con la antigua metrópoli.

Desde la década del 80, muchas aldeas están en conflicto con las empresas de explotación forestal en torno a la reserva del Dja, región rica en moabis. Los aldeanos han enviado numerosas cartas a las autoridades competentes, reivindicando su derecho de uso del espacio forestal y pidiendo protección para los moabis. Han tomado varias medidas, como organizar reuniones con los empresarios, marcar los moabis para señalar su derecho a utilizarlos y bloquear el paso de las máquinas hasta que intervenga el ejército, pero ninguna logró realmente su objetivo. En Bedoumo, el ejército reprimió violentamente una huelga destinada a cerrar el paso a los madereros. Los aldeanos fueron obligados a recoger con la mano las brasas de las fogatas que habían encendido en la ruta para soportar el fresco de la noche; fueron golpeados y torturados, y algunas mujeres embarazadas sufrieron abortos por este motivo. Los conflictos de este tipo movilizan a toda la comunidad, aunque en general sean los hombres quienes figuran, pues se supone que son ellos quienes tienen contacto con las autoridades, verbalmente y por escrito.

Sin embargo, los dos conflictos vinculados específicamente con el moabi que hicieron enfrentarse físicamente a los aldeanos con los empresarios fueron, uno de ellos, impulsado por mujeres, y el otro conducido por mujeres. En Bapilé, la empresa italiana FIPCAM abrió un camino (durante un día de festejos en el que los aldeanos habían ido a una aldea vecina) en el espacio reservado para el bosque comunitario, y destruyó un cementerio. Al día siguiente, al oír el ruido que hacían los leñadores y descubrir varios moabis en flor que habían sido derribados, cinco mujeres del pueblo fueron al bosque para intentar convencer a los trabajadores a que abandonaran la faena, pero sin éxito. En los días siguientes, toda la comunidad se movilizó para bloquear la ruta y las máquinas; luchas y huelgas se sucedieron durante un mes, logrando finalmente que se protegiera a algunos de los árboles restantes y se reconociera el perjuicio causado (300 moabis tumbados), aunque la pérdida no ha sido aún compensada.

En la aldea de Zieng-Ognoul, de Pallisco, un empresario francés abrió un camino en el espacio reservado para el bosque comunitario. Cuando los aldeanos oyeron el ruido, la Sra. Koko Sol marchó al bosque con varias personas del pueblo, principalmente mujeres, y amenazó con prender fuego a las máquinas si los obreros no paraban el

trabajo. Esta iniciativa permitió rechazar a los madereros y preservar gran cantidad de moabis; lamentablemente, once ya habían sido tumbados.

En algunos casos, también surgen conflictos entre los hombres y las mujeres de las aldeas. En primer lugar, porque los hombres trabajan en las empresas y se encargan de inventariar las especies maderables. En segundo lugar, porque algunos de ellos venden moabis de sus campos a aserraderos clandestinos. Una mujer de Ebimimbang afirmó que "los culpables son los hombres, porque son ellos quienes tienen contacto con los empresarios, y bien saben que [el moabi] es muy importante para las mujeres".

La escasez de moabis perjudica especialmente a las mujeres, que deben encontrar otras opciones alimentarias, reciben menos ingresos y carecen de ingredientes medicinales y para tratamientos específicos de enfermedades genitales femeninas. Este fenómeno se suma a la dominación masculina que soportan en sus sociedades. Frente a esta situación, la Sra. Rufine Adjowa decidió crear una ONG llamada CADEFE, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de las mujeres protegiendo al moabi. La idea es reunir a las mujeres de la aldea en pequeños grupos o incluso en cooperativas, para desarrollar la venta de aceite de moabi. Las campesinas pueden así obtener ingresos sustanciosos, que les permiten pagar la escolaridad de los niños y la atención médica, o comprar el petróleo y el jabón que necesitan, sin necesidad de pedir dinero a sus maridos.

Debido a su marginación, todas estas mujeres constituyen un grupo social capaz de impulsar cambios en las relaciones de poder y de proponer soluciones eficaces para la gestión sostenible y equitativa de los ecosistemas boscosos.

Por Sandra Veuthey, en base a observaciones de campo de la autora, correo electrónico: sandra.veuthey@campus.uab.cat

[inicio](#)

- Ecuador: el Pueblo Awá y su territorio entre intereses políticos y presiones económicas

El Ministerio del Ambiente está poniendo en peligro los territorios indígenas en el Ecuador. Bajo un nuevo término, el de "co-manejo", pretende entregar nuestras tierras ancestrales y sus recursos naturales a los madereros, palmicultores y mineros.

El 12 de enero 2007 la Ministra del Ambiente Ana Albán modificó la adjudicación del territorio Awá e instauró un régimen de co-manejo entre comunidades indígenas Awá y afroecuatorianas para la Parroquia de Ricaurte-Tululbí, Cantón San Lorenzo, Provincia Esmeraldas. Esta resolución afecta a las cinco comunidades Awá: Guadualito, Mataje, Balsareño, Pambilar y La Unión, con 771 habitantes, y a un territorio de unas 17.493 hectáreas.

Los Awá somos una nacionalidad indígena ancestral del noroccidente del Ecuador y suroccidente de Colombia. Tenemos una cultura única con idioma propio, el "Awa pit". En el Ecuador poseemos 22 centros (comunidades) Awá legalmente conformados. Todos están organizados en la Federación de Centros Awá del Ecuador (FCAE), legalmente reconocida por el estado ecuatoriano. La FCAE y sus 22 centros tienen adjudicados en total, mediante diferentes títulos, unas 115.336 hectáreas de tierras comunitarias localizadas en las provincias de Esmeraldas, Carchi e Imbabura.

Necesitamos nuestras tierras para el sustento de vida y nuestra supervivencia. No vamos a abandonar nuestras casas y comunidades ni vamos a ceder un solo paso. Si nuestras tierras ancestrales son invadidas, habrá enfrentamientos. Defenderemos nuestra tierra hasta lo último, aunque sea con nuestras vidas. En absoluto deseamos que se llegue a ningún extremo ni violencia, pero responsabilizaremos directamente a la Ministra Ana Albán de todo lo que pueda pasar en este caso.

Nosotros nos amparamos en nuestros derechos legítimos garantizados en la constitución ecuatoriana y en tratados internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, firmado por el Estado ecuatoriano.

En Abril de 2006 la Asociación de Negros del Ecuador (ASONE) envió una carta al ex presidente Alfredo Palacios donde reclamaba, mediante informaciones falsas y acusaciones malintencionadas, que se derogara la adjudicación de nuestro territorio Awá de 99.337 has realizada por el Ministerio del Ambiente el 2 de marzo de 2006.

Basta visitar las tierras para verificar quién vive y tiene sus cultivos allí. ASONE dice de nosotros que somos colombianos y narcotraficantes, pero la verdad es que somos una de las 14 nacionalidades indígenas oficialmente reconocidas en el Ecuador. Todos somos nacidos acá, tenemos cédulas ecuatorianas y todas nuestras comunidades están jurídicamente constituidas. No existen cultivos de coca en el territorio Awá.

Siempre hemos vivido de forma pacífica en nuestras tierras, sin que nadie haya reclamado derechos ancestrales sobre éstas. El 2 de marzo 2006, después de 30 años de lucha, la Ministra del Ambiente Alban finalmente nos adjudicó 99.337 hectáreas de nuestras tierras ancestrales. Esta adjudicación ha sido el resultado de un minucioso trabajo público, administrativo y de campo que ha durado tres años. Se ha revisado en el campo cada metro de nuestros linderos.

Además, las mismas tierras ya fueron linderadas como "Área de Asentamiento Tradicional de la Comunidad Indígena Awá" por parte del Ministerio de Agricultura en 1988 y fue delimitada y reconocida nuestra posesión ancestral como "Reserva Étnica Awá" para 101.000 hectáreas por parte del INEFAN, antecesor del Ministerio del Ambiente, en 1995. Los linderos de nuestras tierras nunca se han movido.

Detrás de esta denuncia están traficantes de tierras de San Francisco y San Lorenzo, organizaciones fantasmas como el "Frente Cívico de Defensa de los Territorios Ancestrales" en conjunto con el ex diputado Rafael Erazo de Esmeraldas. Ellos quieren vender nuestros recursos naturales y tierras a las empresas madereras, palmicultoras y mineras. Se esconden detrás de la ASONE para hacer aparentar que se trata de un conflicto étnico, pero no es así. Nosotros no tenemos problemas con las comunidades afroecuatorianas. Hace siglos estamos conviviendo con ellas como buenos vecinos, cada uno en sus tierras. Respetemos mutuamente nuestras culturas y nuestras tierras.

Ahora en marzo ya hubo la primera invasión de Guido Rodríguez, un conocido intermediario maderero de la zona, quien trabaja para Plywood Ecuatoriana y CODESA, del Grupo Álvarez Barba. Invadió con su personal el bosque del centro Awá Balsareño para abrir franjas en el bosque. La comunidad lo expulsó, como ya lo hicimos en el 2005, cuando entró con tractores forestales al territorio Awá para talar nuestro bosque y convertirlo en tableros de contrachapados.

En otro centro Awá, el de Río Tigre en la provincia de Carchi, cantón Tulcán, la situación está aún peor. En el año 2002 el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), institución estatal responsable de la adjudicación de tierras, adjudicó legalmente al centro Awá Río Tigre, 6.024 hectáreas de tierras ancestrales comunales. Pero en diciembre del año pasado el INDA resolvió revertir la adjudicación del territorio al estado, aceptando la demanda de dos asociaciones agrícolas de Ibarra, la "Asociación de Trabajadores Autónomos San Vicente" y la "Asociación de Desarrollo Comunitario Vista Hermosa del Río Tigre" que están reclamando unas 4.000 has de bosques dentro del territorio Awá.

Estas asociaciones igualmente son especuladoras de tierras, que quieren hacerse de nuestras tierras y bosques para hacer negocio. Nunca han vivido allí o trabajado estas tierras. Tienen como socio una corporación (Egocreanet – Ecuador), a la cual quieren adjudicar unas 500 has de estas tierras.

Hoy en día nuestro territorio es el último gran remanente de selva húmeda tropical de toda la costa ecuatoriana.

Siempre hemos defendido nuestras tierras y hemos conservado nuestros bosques. Estamos viviendo en armonía con el medio ambiente, aprovechándolo sin destruirlo. Como ya no hay maderas ni tierras disponibles para nuevas plantaciones de palma quieren apoderarse de nuestro territorio Awá.

No permitiremos que desalojen nuestras comunidades para vender nuestro territorio a los madereros y palmicultores. Estamos organizados y listos para implementar cualquier acción necesaria. Tenemos nuestro propio Subprograma de Manejo Forestal Comunitario y un Centro de Acopio y Transformación de Maderas en San Lorenzo. Aprovechamos pequeñas cantidades de madera con métodos tradicionales y de bajo impacto ambiental.

Si existe este interés en recuperar tierras ancestrales en la zona de San Lorenzo, las autoridades deben recuperar las decenas de miles de hectáreas de tierras que fueron saqueadas a las comunidades afroecuatorianas por parte de las empresas palmicultoras. Estas últimas han talado desde 1999 unas 40.000 hectáreas de bosques en el cantón de San Lorenzo para el establecimiento de plantaciones industriales con palma africana.

Las consecuencias son gravísimas. Los bosques del Chocó con su altísima biodiversidad han desaparecido para siempre. Los animales de caza y la pesca en los ríos se han acabado. Las comunidades afroecuatorianas se quedaron prácticamente sin tierras, comida y fuentes de trabajo. Los ríos fueron envenenados con plaguicidas y fertilizantes de las plantaciones de palma. Un desierto verde agroindustrial.

En este contexto también cabe indicar la complicidad del Estado ecuatoriano en la ocupación de tierras ancestrales y en la tala de los bosques del cantón de San Lorenzo. El 8 de agosto del 2002, el ex presidente Gustavo Noboa firmó el decreto 2961, que designa para uso agrícola a un polígono de aproximadamente 60.000 hectáreas de tierras comunitarias del cantón de San Lorenzo, entre ellos partes del territorio Awá y 5.000 hectáreas de Patrimonio Forestal del Estado.

Este decreto fue elaborado en conjunto por los Ministerios del Ambiente, Agricultura y Relaciones Exteriores y empresas palmicultoras. El objetivo del decreto ha sido legitimar las tierras que las palmicultoras han adquirido ilegalmente, ampliar su superficie y legalizar la tala de bosque que han realizado durante años sin contar con permisos ni estudios de impacto ambiental, ni tomar en cuenta a las comunidades locales.

La FCAE exige al gobierno ecuatoriano que:

- Respete y asegure definitivamente los títulos de propiedad para el territorio Awá.
- Persecución de todas las invasiones, extracciones de maderas por terceros, etc. en el territorio Awá.
- Reconocimiento de la autoridad indígena Awá para el territorio (circunscripción).

A la vez pedimos apoyo y respaldo de todas las organizaciones para la defensa de nuestra tierra.

Por: Olindo Nastacuaz, Presidente de la Federación de Centros Awá del Ecuador (FCAE), correo electrónico: fedawa@federacionawa.org, www.federacionawa.org

[inicio](#)

- India: el movimiento indígena de Jharkhand impugna los planes de desarrollo industrial que amenazan con destruir los bosques, las tierras cultivables y la forma de vida de los Adivasi

Al igual que los gobiernos de muchos otros estados de la India, el gobierno del estado de Jharkhand planea una gigantesca expansión industrial en toda la región en nombre del "desarrollo" y la "reducción de la pobreza". Para angustia y desilusión de los movimientos sociales de Jharkhand, funcionarios del gobierno electos recientemente pretenden respaldar los acuerdos celebrados entre el anterior gobierno del estado e importantes empresas del acero

y la minería. A cambio de la inversión de 1.691.980 millones de rupias (alrededor de US\$ 3.800 millones), estos acuerdos prometen a las empresas la adquisición masiva de tierras, lo que conllevará la deforestación de no menos de 57.000 hectáreas y el desplazamiento de 9.615 familias, muchas de ellas residentes en zonas catalogadas como protegidas legalmente y reservadas para los pueblos indígenas Adivasi del estado.

En el distrito de Ranchi, por ejemplo, la empresa británica Arcelor Mittal tiene planes de ocupar tierras y bosques tribales en Karra Block para instalar una inmensa fábrica de acero con el respaldo del gobierno del estado. Todo este plan se desarrolló sin consultar y sin el consentimiento previo de los pueblos Adivasi afectados, lo que contraviene directamente la legislación que protege a los pueblos indígenas, con inclusión del Quinto Programa [disposición constitucional referida a la protección de ciertas zonas y de los derechos tribales], la Ley de tenencia de Chotanagpur (1908) y la sentencia Samata.

Durante los dos últimos años los movimientos indígenas y sociales de Jharkhand se han movilizadado contra estos planes oficiales de desarrollo industrial masivo en el estado. Los movimientos populares responden con un “no” rotundo a los desplazamientos relacionados con la industria y rechazan la interferencia de “funcionarios de enlace con la comunidad” empresariales, o militantes y dirigentes de partidos políticos en los asuntos locales y en sus procesos de adopción de decisiones.

En Karra Block, el pueblo Adivasi ha fundado la organización Ottehasa Horo Sangathan (Organización del Pueblo de la Tierra) para hacer campaña para salvar sus tierras y bosques tradicionales. La aldea de Udikel es una de las 144 comunidades amenazadas por el desplazamiento donde la gente se ha organizado contra el “desarrollo” impuesto desde arriba.

Nandi Pahan, dirigente del panchayat [consejo electivo de la aldea] de Udikel, afirma que su comunidad jamás cambiará sus bosques y tierras por el desarrollo industrial:

“Todo está aquí en nuestras tierras tradicionales: nuestros hogares, nuestros campos, nuestros bosques, nuestros cementerios y sitios ceremoniales. Para nosotros esta tierra es sagrada. Aquí es donde celebramos nuestro festival Baha (fiesta de las flores) y otras ceremonias. En el bosque están nuestros ‘lugares de oración’ *sarna* especiales. Así, nuestra tierra es parte de nuestra forma de vivir. No entregaremos nuestra tierra. Si lo hacemos, ¿qué comeremos? ¿Adónde iremos a plantar nuestros cultivos?”

Otros dirigentes comunitarios lo respaldan:

“Para nosotros el bosque tiene una gran importancia. En el bosque recogemos medicinas y frutas como el karanj. Recolectamos productos forestales menores para vender. Tenemos nuestros huertos, donde cultivamos mango y tamarindo. Usamos el bosque para obtener materiales para construir nuestras casas y fabricar herramientas, incluso implementos agrícolas. ¿Cómo podría una fábrica sustituir todo esto? Se trata de nuestra cultura y de nuestro sustento. No podemos entregar esta tierra y no lo haremos.” [Devar Pahan, de la aldea de Udikel]

En el distrito de Seraikella Karshwan, las empresas mineras y del acero han presionado a las aldeas Adivasi para que entreguen sus tierras y bosques tradicionales al “desarrollo”. No menos de 39 aldeas en cuatro panchayats del distrito informaron que en los últimos años habían recibido visitas de agentes empresariales que intentaron persuadirlos de que entregaran sus tierras para la minería. Dalbhanga Panchayat, por ejemplo, estuvo bajo presión constante para que abriera sus tierras a las minas de piedra caliza y solamente logró detener el acoso de los agentes empresariales con un acto masivo de protesta contra la mina propuesta. En Rugudi Panchayat, la empresa Magila L Phonta Ltd ha solicitado autorización para establecer una mina de oro que afectaría las aldeas de Ramdih y Mutugarha.

También aquí los aldeanos se opusieron a estos planes y rechazaron los avances de los agentes empresariales, en parte gracias a la organización, en 2005 y 2006, de numerosas movilizaciones de protesta contra el indeseado

avance minero en sus tierras.

“No queremos entregarle nuestra tierra y nuestros derechos consuetudinarios a cualquiera, trátese del gobierno o de empresas privadas. Nuestra tierra y nuestro bosque son la fuente de la vida para nuestras comunidades. Para nosotros, el bosque y la tierra lo son todo. ¡Nunca permitiremos que las empresas o el Estado nos los quiten!” [Mangal Singh, aldea de Batani, Torandih Panchayat]

“Si vienen las empresas mineras, este lugar terminará siendo como la isla Kolapani (remota y solitaria): se parecerá al infierno. Se convertirá en un lugar miserable. Se irá todo el verde y nuestra tierra se echará a perder. Nuestra salud sufrirá y nuestras plantas medicinales serán destruidas. La empresa puede prometer que sustituirá nuestros bosques, pero será con árboles venenosos que se chuparán el agua de nuestras tierras. Estos árboles (eucaliptos) aquí no le sirven a nadie, ni a los humanos ni a los animales. Es por eso que no entregaremos nuestros derechos.” [Ghopal Singh Munda, aldea de Siyadia, Rugudi Panchayat, Buchei Block, Bakas Mundari Khuntkatti y secretario general de Samiti Rakshe Evam Vikas]

Por más información sobre las amenazas para los bosques y los indígenas y la oposición de los movimientos populares al desarrollo minero e industrial en Jharkhand sírvase entrar en contacto con Sanjay Bosu Mullick, del Movimiento para Salvar los Bosques de Jharkhand (Jarkhand Save the Forest Movement), correo electrónico: rch_sanjay@sanchart.in, y Tom Griffiths, Forest Peoples Programme, correo electrónico: tom@forestpeoples.org. Vea también un artículo más detallado con fotografías en: http://www.forestpeoples.org/documents/asia_pacific/india_jharkhand_feb07_eng.pdf

[inicio](#)

- **Nigeria: las mujeres de Idheze cierran instalaciones petroleras de Agip**

En el boletín N° 111 del WRM compartimos con ustedes las acciones de la “Operación Cambio Climático”, lanzada el 1° de enero de 1999, en el Delta del Níger: los activistas cerraron las estaciones de bombeo de crudo y detuvieron la combustión de gases. La respuesta fue la destrucción de numerosas casas, además de asesinatos y violaciones. Sin embargo, la lucha continuó y muchas mujeres iniciaron una campaña conjunta para proteger la vida poniendo fin a la depredación del Gran Petróleo. Y ganaron una batalla: en enero de 2006 la Justicia nigeriana ordenó a Shell detener la combustión de gas natural en Ogoniland.

Ahora las mujeres van por más. Las mujeres de la comunidad de Idheze, consejo local de Isoko Sur, estado de Delta, han vuelto a cerrar instalaciones petroleras de la empresa Nigeria Agip Oil Company (NAOC) alegando el no pago de las indemnizaciones debidas por los daños que ocasionaron los fluidos químicos y desechos que la empresa vertió en la comunidad.

No hace mucho los desechos químicos de la plataforma de perforación fueron vertidos en el pantano de Idheze, lo que provocó la muerte y destrucción de la vida acuática. Los días siguientes se vieron muchos animales acuáticos muertos flotando en los estanques.

A principios de diciembre de 2006 las mujeres ocuparon unas instalaciones petroleras pertenecientes a Agip debido a que la empresa no instrumentó un acuerdo anterior firmado con la comunidad en el momento de entrar en su territorio.

Informaron que en 1982 un derrame había provocado la muerte de siete adultos y tres niños y destruido árboles y cultivos de valor rentable.

Las mujeres bloquearon la entrada principal del local de la empresa e impidieron la entrada de los trabajadores.

Llevaban pancartas con inscripciones como "Estamos cansadas del tratamiento inhumano de NAOC", "Seguiremos interrumpiéndoles el funcionamiento hasta que atiendan nuestras demandas", "Paguen la indemnización por los desechos y fluidos químicos que usaron para contaminar nuestra tierra".

Las mujeres llegaron a las instalaciones con sus utensilios y alimentos, como bolsas de arroz, ñame y garri (alimento básico a base de mandioca) y toldos con los que montaron unas tiendas improvisadas. Prometieron no desalojar el lugar mientras no se hubieran atendido sus demandas.

Según ellas, luego de todo lo que sufrió la comunidad por culpa del derrame, Agip se ha negado a cumplir lo dispuesto por el organismo inspector de la Compañía Nacional del Petróleo de Nigeria (NNPC), que ordenó a Agip compensar a la comunidad.

A la cabeza de las manifestantes, la Sra. Mercy Okunwa, quien habló en nombre del presidente general de la comunidad, Joel Ogbu, acusó a la empresa de falta de sensibilidad ante la terrible situación de la población local y de incumplir un acuerdo celebrado con la comunidad el pasado mes de diciembre en Puerto Harcourt.

Okunwa declaró que la actitud negligente de NAOC respecto de los asuntos de su comunidad había llevado a ésta a manifestarse en protesta el 19 de diciembre de 2006 y expresar su disgusto porque "hasta el momento no se ha instrumentado ninguna de las promesas que hizo NAOC cuando invitó a la gente de la comunidad".

Reveló que muchas de las empresas de servicios que trabajan en las plataformas de perforación estaban "llevando a cabo, a sabiendas de Agip, un trabajo perjudicial para la comunidad pues ninguna de ellas paga regalías a la comunidad".

Acusó a empresas de servicios como SERIC, IMPEANTI y KCA Deutage por violar directamente los acuerdos celebrados con la comunidad, añadiendo que Agip conspiraba con algunas de estas empresas para robar a la comunidad sus derechos. También se lamentó de que se hubiera otorgado a extraños los contratos que deberían haber sido para los indígenas.

"Somos amantes de la paz y, sabiendo que Agip nos ha estado engañando, esta vez no queremos nada que pueda perjudicar a nuestra gente, así que no desalojaremos el lugar hasta que la dirección de la empresa no haya respondido a nuestras exigencias", declararon las mujeres agraviadas.

Artículo basado en "Women protesters shut oil facility as toxic waste ravages community", Chido Okafor, Warri, enviado por Oilwatch, correo-e: info@oilwatch.org

[inicio](#)

COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES

- **Brasil: un panorama de los monocultivos de eucaliptos**

Los monocultivos de eucaliptos avanzan en amplias zonas del país, ocupando territorios de poblaciones tradicionales, desplazándolas, expulsando a la gente del campo y contribuyendo así a la creación de cinturones de pobreza, con el contexto de violencia y criminalidad que éstos necesariamente conllevan. Y como si todo eso fuera poco, también vienen por su cuota de sangre.

El 26 de febrero de 2007, a las 21 horas, en el Norte de Minas Gerais, un guardia armado de la empresa V&M FLORESTAL, que ha plantado millares de hectáreas de eucaliptos en la zona, asesinó cobardemente a Antonio Joaquim dos Santos, agricultor y extractivista, de 32 años, casado, padre de cuatro hijos. Joaquim y su hija Eudisleia

retornaban al hogar después de recoger leña para uso doméstico. Dos guardias armados de V&M, conocidos como Claudinei y Joãozinho de Carmina, agarraron a Antonio Joaquim, lo ataron, golpearon y posteriormente le dispararon dos balazos en la boca, en frente de su hija. Es de destacar que el suceso aconteció en una plantación de eucaliptos certificada por el FSC, que supuestamente garantiza un manejo que apunte a "mantener o elevar el bienestar social y económico de los trabajadores forestales y de las comunidades locales a corto y largo plazo". Según integrantes de la comunidad, Antonio Joaquim estaba recogiendo leña en la propiedad de su hermano, de donde fue retirado por los guardias, quienes lo arrastraron al área de V&M.

El año pasado, la comunidad de Canabra hizo una denuncia internacional relatando sus penurias y falta de alternativas como consecuencia de la deforestación de los "cerrados" provocada por la empresa V&M, que dejaba a la comunidad sin acceso a leña y frutas nativas, además de secar el río Canabra. La respuesta de V&M fue aumentar la presión sobre la comunidad, que desde entonces vivió aterrorizada con las amenazas de los guardias armados, que se han apoderado de carretas y de herramientas de trabajo de los agricultores, han empleado violencia verbal y física contra los integrantes de la comunidad y han presionado incluso a los niños cuando, de regreso de la escuela, traían pequeños haces de leña en sus bicicletas.

Varias organizaciones sociales (Rede Alerta Contra o Deserto Verde, CAA NM, CPT, Fórum Regional de Desenvolvimento Sustentável do Norte de Minas, MST, ASA Minas Gerais) que denunciaron el asesinato, iniciaron acciones ante autoridades oficiales y de derechos humanos para una intervención inmediata y enérgica contra los desmanes de la empresa. También efectuaron denuncias ante el FSC Brasil y el FSC Internacional para el retiro inmediato del Sello Verde otorgado a V&M. Coincidentemente, la empresa se adelantó a los acontecimientos y el 15 de marzo pasado comunicó su "decisión de retirarse voluntariamente del FSC después de 8 años de relación muy estrecha". El motivo que alega la empresa es que no está de acuerdo con la forma en que se llevó a cabo la auditoría por parte del órgano certificador (SGS).

Mientras tanto, las industrias celulósicas atacan por otros flancos. Stora Enso viene adquiriendo tierras en la frontera oeste del Estado de Rio Grande do Sul. A pesar de que muestra cautela, ya que declaró que "Estamos en proceso continuado de adquisición de tierras y la posibilidad de invertir en la fábrica Stora Enso todavía no está decidida", el proyecto inicial de la empresa sueco-finlandesa prevé establecer plantaciones de eucaliptos en una superficie de 100 mil hectáreas. Para lograr su objetivo trabaja presionando al INCRA, que es el órgano que instruye el proceso y da la opinión técnica, para que dé un parecer favorable, y procura que en el Congreso Nacional se modifique la Ley Federal 6634/79 --que obstaculiza a empresas extranjeras la tenencia de tierras en zona de frontera--, tratando de reducir de 150km a 50km la distancia a la línea fronteriza que sería considerada zona de frontera.

Oficialmente la empresa alega tener 45 mil hectáreas en esta región, pero datos de un organismo oficial (FEPAM) de 2005 indicaban 60 mil hectáreas y otras fuentes afirman que llegan a 150.000. Independientemente de la cantidad, no es posible registrarlas ya que nunca se explicó a la opinión pública dónde se localizan.

Otros intereses celulósicos también avanzan por Río Grande del Sur. El grupo empresarial brasileño "Votorantim Celulose e Papel" presentó una propuesta al gobierno de su país y al Estado de Río Grande del Sur, para construir una nueva fábrica de pasta de celulosa, próxima a la Laguna Merín. Dicho emprendimiento, que cuenta con el visto bueno de la gobernadora del citado Estado, implicaría una inversión de alrededor de U\$S 1.300 millones. A pesar de que la decisión respecto a la construcción de la planta, cuyo nombre sería Três Lagoas y que produciría al estar culminada en 2010 cerca de un 1 millón de toneladas por año, será tomada en los meses venideros, el gobierno brasileño ha manifestado su beneplácito a la instalación de la fábrica de celulosa.

En el Estado de Río de Janeiro se decidió rever una ley ambiental que obstaculizaba la inversión del sector celulósico en la zona. Ahora hay en discusión un nuevo proyecto de ley sobre las plantaciones comerciales de árboles, que significaría dar luz verde para que 14 municipios del Norte y Nordeste del Estado se conviertan en zonas productoras de eucaliptos para las industrias de papel y celulosa y madereras. Desde largo tiempo atrás grandes empresas de

esos sectores habían manifestado su interés en invertir en el Estado de Río. Pero había una ley del entonces diputado estadual Carlos Minc, hoy secretario de Medio Ambiente, que exigía una contrapartida que inviabilizaba los proyectos. En efecto, la ley 4.063/2003 disponía que por cada cien hectáreas de plantaciones comerciales, se reforestaran 30 hectáreas con especies nativas, como compensación. La propuesta de los secretarios municipales de Medio Ambiente (Minc entre ellos), es enviar a la Asamblea Legislativa un nuevo proyecto de ley que reduzca la contrapartida de 30 a 10 hectáreas para las zonas del Norte y Nordeste del Estado.

Las plantaciones de eucaliptos en gran escala para exportación, aún cuando se conviertan en legales, nunca serán morales. No es moral destinar tierras fértiles para ese fin cuando el pueblo pasa hambre, cuando los pueblos indígenas, primeros y eternos dueños de aquellas tierras, están en los bordes de los caminos sin que les hayan demarcado sus tierras, cuando a las comunidades afrobrasileñas no se les reconocen legalmente sus territorios, cuando el número de los sin tierra aumenta, cuando no hay unidades de conservación ni incentivos a la producción que implique la protección de la naturaleza.

Como muestra de un modelo alternativo que funciona y da soluciones a la gente, el Asentamiento Santa María de Ibicuí, establecido en 6.600 hectáreas donde cada unidad familiar posee media hectárea, el año pasado produjo 80.000 litros de leche al mes, además de plantaciones de maíz, de sandía y aipim en las pequeñas huertas. Las 220 familias asentadas conforman un total de 900 a 1.000 personas. Los adultos tienen empleo y generan ingresos para el municipio.

Hay alternativas, hay otros modelos posibles. Lo que hay que construir es la voluntad para transitar por ellos. En eso está el pueblo brasileño que resiste y construye.

Artículo elaborado en base a información obtenida de: Comunicado de la Red Alerta contra el Desierto Verde del 27/02/2007, transmitiendo la noticia del asesinato de Antonio Joaquim dos Santos, enviado por FASE, correo electrónico: geise.fase@terra.com.br; "O tirano projeto da celulose no Rio Grande do Sul - reflexões a partir do Seminário em Manoel Viana", por Ana Paula Fagundes, correo electrónico: sorriam@hotmail.com, versión completa en http://www.wrm.org.uy/paises/Brasil/Informe_Viana.pdf; "Proyectan construir nueva planta de celulosa en Brasil", diario La República, Uruguay, febrero de 2007; "Stora Enso prevê uma área de 100 mil hectares para plantar eucaliptos no RS", 2/3/2007; "Eucalipto no Norte do Rio de Janeiro", Clipping Service, y "Conjuntura do monocultivo de eucalipto no Rio Grande do Sul e a luta dos movimentos sociais", por J.H. Hoffmann y Lino De David, enviados por Joao Pedro Stedile, MST, correo electrónico: sgeral@mst.org.br

inicio

- Camboya: los indígenas Jarai inician acciones legales para reclamar su tierra

La pérdida de tierras y de acceso a los recursos naturales está empeorando la crisis de la economía y los medios de subsistencia de las comunidades rurales de Camboya. "Se está despojando a la gente de sus tierras por quienes tienen poder político y dinero", escribe Shalmali Guttal en un informe reciente para Focus on the Global South.*

Asimismo, señala Guttal, la pérdida de tierra se traduce en "hambre, falta de efectivo, problemas de salud y pobreza extrema para las comunidades rurales". Cuando las comunidades indígenas pierden su tierra, eso implica también la pérdida de su sustento, cultura y tradición. "La pérdida de territorios tradicionales provoca consecuencias extremadamente graves para las comunidades indígenas, entre ellas enfermedades, indigencia e incluso la muerte."

Para el año 2004, las empresas privadas habían tomado el control de 2,7 millones de hectáreas de tierra bajo contratos de concesión. Dentro de esta cifra están las "concesiones económicas de tierras", utilizadas para plantaciones industriales, minería, exploración petrolera, pesca y turismo. En muchos casos, las concesiones se establecen en tierras pertenecientes a los aldeanos. Tratan de contrarrestar la resistencia mediante sobornos a los

jefes de la aldea, a menudo seguidos de demostraciones de violencia por parte de la policía, militares o guardias de seguridad privados.

Algunos de los casos más flagrantes de usurpación de tierras tuvieron lugar en la provincia de Ratanakiri, al noreste de Camboya. Las aldeas indígenas Jarai de Kong Yu y Kong Thom, en el área de O'Yodao, permiten ver de un vistazo lo que está sucediendo en todas partes del país.

En los últimos tres años, las tierras de los Jarai han sido arrasadas para dar lugar a una plantación de caucho de 500 hectáreas. Un cartel a la entrada de la plantación del pueblo de Kong Yu dice: "Prohibida la entrada sin autorización".

La concesión pertenece a Keat Kolney, hermana del Ministro de Finanzas de Camboya, Keat Chhon. A su vez, el Ministro de Ordenamiento Territorial es Chhan Saphan, esposo de Keat Kolney. Las autoridades locales forzaron el acuerdo por medio de amenazas, engaños y fraude. Algunos miembros del Consejo Comunal admitieron públicamente haber aceptado sobornos para asegurar que se llevara a cabo la transacción de tierras.

A comienzos del 2004, cuando los funcionarios comunales pidieron a los aldeanos que vendieran sus tierras, estos se negaron. Entonces los funcionarios volvieron con una historia, diciendo que el Primer Ministro Hun Sen necesitaba la tierra para los soldados discapacitados y que los aldeanos no tenían ningún derecho a la misma. Al no estar seguros de sus derechos, y reacios a crear problemas con el primer ministro o la armada, aceptaron entregar 50 hectáreas de tierra.

En agosto de 2004, los funcionarios organizaron una fiesta para los aldeanos ofreciéndoles cerdo, cerveza y dos grandes jarras de sake. Ya avanzada la fiesta los funcionarios tomaron las huellas digitales de los aldeanos con tinta roja. Una semana más tarde, junto con Keat Kolney, distribuyeron regalos, como pareos, y dinero. Luego pidieron a los aldeanos que firmaran con su huella digital documentos que no entendían.

Sayo Tem, aldeano Jarai, dijo al Phnom Penh Post que "nos dijeron que si no estábamos de acuerdo con la venta de la tierra o no aceptábamos el dinero, de todas formas tomarían la tierra sin pagar nada ni darnos [siquiera] un grano de sal".

Cuando las excavadoras comenzaron a arrasar sus tierras y bosques, los aldeanos se dieron cuenta de que habían sido engañados. La tierra había sido transferida a Keat Kolney, no a soldados discapacitados, y el área era de 500 hectáreas, diez veces la superficie acordada previamente. Los aldeanos de Kong Yu presentaron una queja ante las oficinas administrativas locales.

En febrero de 2006, 200 aldeanos se reunieron en la oficina comunal local para solicitar información sobre la empresa que estaba talando su tierra y para expresar sus preocupaciones. Los funcionarios los acusaron de causar tensiones sociales y la policía los amenazó con arrestarlos si llevaban a cabo cualquier otra manifestación.

El 23 de enero de 2007, las ONG Community Legal Education Center (CLEC) y Legal Aid of Cambodia (LAC) presentaron una demanda a solicitud de los aldeanos, para intentar recuperar la posesión de su tierra.

In Sam Ath, representante de Keat Kolney, argumenta que las huellas digitales prueban que la transacción es legal. "Las autoridades provinciales ponen a nuestra plantación como un ejemplo para nuevos inversores", dijo al Cambodia Daily.

De hecho, la ley de contratos de Camboya establece que los contratos deben ser firmados libremente, entre partes informadas, sin fraude, engaño o coacción. La legislación en materia de tierras incluye la protección a los territorios indígenas y el reconocimiento de la propiedad colectiva de los mismos. El manejo de la tierra, como por ejemplo la transferencia de derechos, debe estar libre de interferencia oficial. Aceptar sobornos, como ha sido admitido por

varios funcionarios, es también ilegal.

“Ratanakiri está actualmente en crisis”, dice Ngy San, subdirector de NGO Forum. “La apropiación de tierras está fuera de control y está devastando la vida de los indígenas. Kong Yu es emblemático por ser el peor de los casos de este tipo, donde los intereses de los ricos y poderosos se contraponen a las necesidades de los pobres. La forma en que este caso sea manejado por la Corte será una prueba decisiva para las disputas territoriales en toda Camboya.”

El CLEC solicita el envío de cartas al Primer Ministro Hun Sen y a los embajadores en Camboya, en apoyo a los aldeanos de Kong Yu y Kong Thom. Encontrarán modelos de cartas en:

<http://www.wrm.org.uy/paises/Camboya/Cartas.html>

* Shalmali Guttal, 2006, “Land and Natural Resource Alienation in Cambodia”, Focus on the Global South. Ver:

<http://www.focusweb.org/land-and-natural-resource-alienation-in-cambodia-17.html>

Por Chris Lang, correo electrónico: chrislang@t-online.de, www.chrislang.blogspot.com

[inicio](#)

- Camerún: la dura realidad de las plantaciones de palma aceitera

En diciembre pasado, cuatro personas (un camerunés, una pareja suiza y un uruguayo), recorríamos el camino público que atraviesa las plantaciones de palma aceitera de Socapalm (Société Camerounaise des Palmeraies) en la región de Kribi. Al llegar a la barrera de control instalada por la empresa –que ya habíamos atravesado más temprano en el día- fuimos detenidos por un guardia de seguridad privada, que nos exigió nuestros documentos de identidad. Al preguntarle el porqué de tal demanda, nos informó que así se lo habían exigido “agentes secretos” de Socapalm que estaban al tanto de nuestra visita. Agregó que también se le había dicho que tenía que llevarnos a la oficina de información de la empresa. Por supuesto que ni le entregamos nuestros documentos ni aceptamos que nos llevara a la tal oficina de información porque la empresa no tiene derecho legal a exigirlo. Sin embargo, la anécdota sirve para ilustrar el poder de la empresa y el control de tipo policial que ejerce sobre los pobladores de la zona.

A pesar de su nombre, Socapalm no es una “sociedad camerunesa”, sino que pertenece al poderoso grupo francés Bolloré, que también es propietario de otra gran plantación de palma aceitera en la región de Kribi (Ferme Suisse), que en conjunto totalizan 31.000 hectáreas.

En el boletín del mes pasado publicamos un artículo sobre los graves impactos sociales y ambientales de una plantación de caucho en la misma región de Kribi (perteneciente a la empresa Hevecam). Lo interesante es que el presente artículo es casi igual al anterior, con la única diferencia de que el nombre de las empresas es distinto.

En efecto, los indígenas Bagyeli (“pigmeos”) que viven en las inmediaciones de las plantaciones de palma dijeron prácticamente lo mismo que los Bagyeli afectados por las plantaciones de caucho. Socapalm los desalojó de sus viviendas, prometiéndoles casas modernas. Las palmas fueron plantadas, crecieron, dieron fruto, fueron cosechadas, pero la empresa no construyó ni una sola casa.

Ahora estos Bagyeli están rodeados de plantaciones, a las que no se les permite ingresar. En caso de hacerlo, si los guardias los agarran los expulsan a latigazos. Están forzados a vivir en una zona inundable donde abundan los mosquitos y las enfermedades asociadas a los mismos.

En cuanto a medios de vida, apenas pueden sobrevivir. Por un lado, la empresa no les da trabajo y las pocas veces que lo hace les paga mucho menos que a otros trabajadores. Lo único que queda para cazar dentro de la plantación son ratas. Solo se caza algo en las márgenes de la plantación y más lejos en la montaña.

Todo ello es consecuencia de la destrucción del bosque tropical llevado a cabo por la empresa para convertirlo en plantaciones de palma. Antes los Bagyeli (expertos cazadores y recolectores), encontraban en el bosque todo lo necesario para vivir (carne, fruta, etc.). Ahora ni siquiera cuentan con agua limpia, ya que la misma está contaminada por fertilizantes químicos y por sedimentos resultantes de la erosión. En materia de salud, los problemas vinculados a la mala alimentación, el agua contaminada y el sitio malsano donde viven se agravan por no contar más con las plantas utilizadas en su medicina tradicional. El hospital es propiedad de Socapalm y como no están en la plantilla de la empresa, deben pagar en caso de ser hospitalizados.

Con respecto a los trabajadores de la empresa la situación tampoco resultó ser diferente a la de las plantaciones de Hevecam. También aquí habitan hacinados en viviendas propiedad de la empresa, también trabajan bajo subcontratistas, también tienen problemas de la vista por la inexistencia de protección frente al polvo que cae del racimo de frutos, también aplican agrotóxicos sin el necesario equipo de protección, también tienen problemas con el agua potable y el saneamiento.

En materia sindical, trabajadores de la empresa nos contaron que no existe sindicato independiente y que es muy difícil que lo vaya a haber. En 1992 hubo una huelga reivindicando mejores condiciones de trabajo y aumento del "salario miserable" que percibían. El resultado fue que los dirigentes de la huelga fueron presos y despedidos.

En momentos en que se promueven las plantaciones de palma para abastecer de combustible a los países del norte, es necesario que los consumidores de esos países sepan que éste no es de ninguna manera un combustible "verde", sino que su verdadero color resulta de la combinación de explotación social, violación de derechos humanos y destrucción ambiental.

Por: Ricardo Carrere, en base a información recopilada durante la recorrida realizada en la región en diciembre de 2006 con los investigadores Sandra Veuthey y Julien-Francois Gerber. El autor agradece el apoyo recibido del Centre pour l'Environnement et le Développement (CED), que hizo posible la recorrida.

inicio

- Colombia: empresa de celulosa irlandesa-holandesa acusada de graves delitos sociales y ambientales

El Tribunal Permanente de los Pueblos – Capítulo Colombia se reunió del 26 al 27 de febrero del 2007 en el bajo Atrato, para juzgar a las empresas transnacionales por el tema de la biodiversidad y la explotación de los recursos naturales en Colombia. Las comunidades y las organizaciones sociales participantes -- entre ellas las ambientales--, acusaron a Smurfit Kapa - Cartón de Colombia "por violación de derechos humanos, ambientales, sociales y culturales. Específicamente por: destrucción de selvas húmedas tropicales, bosques andinos y otros ecosistemas y por destruir el tejido social, medios de producción tradicional y cultural de las comunidades; suprimir y contaminar fuente hídrica; influir la formulación de políticas gubernamentales en el país y presionar a funcionarios del Estado en pro de los intereses de la multinacional; ocultar información relacionada con la empresa y manipular los medios de comunicación tanto a escala regional como nacional; usar falsos postulados, información y publicidad mentirosa para justificar sus actividades y enmascarar los impactos generados; acusar y criminalizar con argumentos falsos a quienes denuncian su accionar incorrecto".

En cincuenta años de presencia en territorio colombiano, la empresa ha destruido buena parte de la zona selvática húmeda tropical del bajo Calima en el departamento del Valle del Cauca (Chocó biogeográfico) y Bosque Andino, rastrojos altos y otros ecosistemas en los departamentos del eje cafetero. Ha desarrollado plantaciones en territorio de las comunidades indígenas que viven en los departamentos del Cauca y de Caldas; también tiene sembrados en tierras donde se desarrollaban actividades agrícolas y ganaderas que dinamizaban las economías agrarias de las poblaciones en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Tolima y Antioquia.

Como prueba de las acusaciones a Smurfit Kapa - Cartón de Colombia, se entregó por parte de los denunciantes un libro escrito por Joe Broderick (El Imperio de cartón – Impacto de una multinacional papelera en Colombia) donde se presenta la investigación financiada por el Proyecto Biopacífico Ministerio del Ambiente PNUD – GEF/92/G31. Resalta el autor que en el año 1993, cuando estuvo viviendo en Dublín, conoció que el 70% de las ganancias de “Smurfit” las obtiene en Venezuela, México y Colombia.

Se recogen ampliamente los daños ocasionados por la tala rasa en las zonas transicionales entre bosque muy húmedo tropical y bosque pluvial tropical en la región Pacífica de colinas bajas al sur del río San Juan y el río Calina, en el Chocó biogeográfico, resaltando la afectación a las comunidades afrodescendientes y a las comunidades indígenas de la etnias Embera y Waunamas.

En las zonas de explotación forestal, las comunidades afrodescendientes e indígenas sufrieron cambios culturales por la presencia de empresas madereras asociadas con Cartón de Colombia. Se les impuso un proyecto de vida homogenizante y hegemónico, que generó pérdida de saberes y valores, creó inseguridad y conllevó pérdidas territoriales para las comunidades tradicionales asentadas en la región. La comunidad Waunama vio desaparecer (con la tala rasa) muchos árboles cuya madera ha sido de importancia tradicional para la fabricación de canoas, baúles y demás utensilios, así como de otras especies vegetales apreciadas por su valor alimenticio, medicinal o ritual. Con la actividad maderera extractiva y la destrucción de hábitats se ha perdido una cantidad de animales de monte, tales como tatabra, pavas, guatines, guaguas, paletones y loros; además de muchos peces que ya no se encuentran en los ríos.

En el año 1978, Smurfit Kapa - Cartón de Colombia compró tierras a los terratenientes y plantó pinos en fincas localizadas en municipios de Buenos Aires (Cauca), que desde la década del 60 estaban en proceso de reclamo por las comunidades Paeces por ser territorio ancestral. Los indígenas realizaron acciones de recuperación de su territorio ocupando estas tierras y otros predios; las comunidades querían evitar la compra de más predios y parar el avance de la Smurfit en el Cauca, por ser irrespetuosa con la naturaleza y la flora local. Como ejemplo tenían lo sucedido en la Balsa (Cauca), donde se sembró una finca de mil hectáreas con eucaliptos y fue precedida por la destrucción de los árboles nativos; los indígenas fueron desalojados por el Ejército Nacional, hubo demandas penales y encarcelamiento de algunos líderes. También hubo casos de asesinatos de líderes indígenas: en el año 1985 el indígena Luciano Labio y su esposa fueron asesinados.

En el año 1989, los Paeces y la empresa Smurfit Cartón de Colombia firmaron el llamado acuerdo de Jamundí, por el que se comprometían a mantener el status quo hasta no llegar a un acuerdo definitivo de establecer un resguardo indígena para la comunidad Paez de la Paila. La comunidad indígena continuó la siembra de productos alimenticios en las fincas en disputa y la empresa desplegó su inmenso poderío y su reconocida influencia ante las autoridades regionales y nacionales para desalojarlos. En este contexto los Paeces denuncian “la manguala” [connivencia] que existe entre Smurfit y algunos funcionarios departamentales y municipales del Cauca, al actuar en los desalojos de las fincas recuperadas sin los procedimientos legales pertinentes.

Smurfit Cartón de Colombia aparentemente suspendió actividades en la región de la Paila en el año 1990; pero en el año 1991 crea la empresa “Agroforestal el Naya S.A.”, con la cual evitaba el peligro de que sus pinos fueran a caer en manos de los indígenas (por expropiación o apropiación) y además aseguraba su continuidad en la zona y el derecho de seguir la explotación maderera sin los gastos y responsabilidades que supone la propiedad de la tierra y los rubros laborales para la extracción de madera. Ahora, Smurfit aparentemente queda por fuera pero recibe la madera, y todo corre de cuenta de los socios de Agroforestal.

Los asesinatos de líderes indígenas continuaron: en el año 1992, Miguel Labio Quiguanas fue detenido por soldados del Ejército Nacional mientras viajaba en bus con otros indígenas; su cadáver fue hallado más tarde vestido de uniforme.

La penetración de las plantaciones de coníferas en el occidente del departamento de Cauca por parte de Smurfit-Cartón de Colombia, ha corrido de manera paralela con la negación sistemática de derechos colectivos ligados a la apropiación legal de territorios y ha potenciado - al empujar a las masas de campesinos, indígenas y afrodescendientes a la alejada región del Naya a cultivar coca - la ocurrencia de hechos tan dolorosos para la historia del país y del mundo como la horrenda masacre del Naya, perpetrada por los paramilitares en abril de 2001, que dejó un saldo cercano a los 100 muertos según la comunidad o 70 muertos según la Fiscalía General de la Nación.

Al inicio de la década de los años noventa, la empresa Cartón de Colombia arremetió una agresiva estrategia de compra de tierras para instalar plantaciones de pinos en las áreas altas donde nacen las fuentes de agua y se localizan los relictos del bosque primario altoandino. Las comunidades de Alsacia, Agua Blanca y la Esperanza y el Resguardo Indígena de la Paula, que emprendieron con mayor fuerza la recuperación de tierras y las demandas de titulación, fueron hábilmente engañadas por Cartón de Colombia y divididas. Ante esta situación, muchas familias provenientes de esta zona tomaron la decisión de ocupar tierras en la región del Naya, ubicada en la vertiente del Pacífico, en donde inicialmente establecieron sistemas de producción agrícola. Pero ante la excesiva distancia y el absoluto abandono estatal e vieron obligadas a optar por la siembra de cultivos de uso ilícito.

En abril de 2001 ocurrió una de las masacres más violentas de la historia colombiana por parte de grupos paramilitares, en la que descuartizaron, aserraron, arrojaron a los precipicios y asesinaron de manera generalizada por donde iban pasando a una cantidad aún indeterminada de indígenas, campesinos y afrodescendientes.

Hoy, la siembra de pinos sigue avanzando, dominando el paisaje y arrasando el bosque primario. Las comunidades del Alto Naya no han contado con la titulación del territorio y la localidad de Timba sufre una escasez notoria de agua. Las comunidades del Alto Naya consideran que dentro de los grandes proyectos que amenazan la integridad del territorio y la vida de las comunidades está el avance demoledor de Cartón de Colombia, con su máscara Agroforestal Naya S.A., ahora con presencia paramilitar en la región.

Resumen basado en artículo elaborado por Herney Patiño, Grupos Ecológicos del Risaralda, correo electrónico herpa@uniweb.net.co. El artículo completo está disponible en http://www.wrm.org.uy/paises/Colombia/Smurfit_Kappa.html

[inicio](#)

- Swazilandia: credibilidad del FSC toca fondo con certificación de Sappi

Las plantaciones de Sappi en Swazilandia resumen todo lo malo que sucede en las plantaciones industriales de árboles. Más de 50 años de convivencia con las plantaciones no aportó prácticamente nada al desarrollo de los habitantes del país. Las plantaciones se instalaron en la década de 1950 como un proyecto de "ayuda" británica, cuando se destruyeron praderas ricas en fauna y se desplazaron a los habitantes para abrirles paso. Las plantaciones son monocultivos de pinos, exóticos para Swazilandia. Cada año, Sappi tala un total de 3.000 hectáreas de sus plantaciones y deja tras de sí grandes cicatrices en el paisaje. Cuando se vuelve a plantar la zona, los árboles chupan el agua, lo que seca los arroyos y reduce el caudal de los ríos. Las plantaciones y los criaderos de árboles de Sappi sólo pueden gestionarse mediante el uso de plaguicidas químicos.

En julio de 2006, las plantaciones de Sappi en Swazilandia recibieron la etiqueta 'verde' del FSC (siglas en inglés del Consejo de Manejo Forestal) luego de la evaluación realizada por la Soil Association's Woodmark. Fundada en 1946, una parte importante de la labor de la Soil Association ha sido la de "fomentar la agricultura orgánica como alternativa sostenible a los métodos agrícolas intensivos". Pero al certificar las plantaciones de Sappi en Swazilandia, Woodmark fomenta los monocultivos intensivos y no orgánicos, exactamente lo opuesto a lo que se pretendía con la creación de la Soil Association.

Durante la evaluación realizada a las plantaciones de Sappi en mayo de 2006, Woodmark halló que los procedimientos de replantación de Sappi no cumplían las disposiciones nacionales que exigían dejar una franja libre de 30 metros de ancho a lo largo de los arroyos. En una localidad, los árboles se habían plantado demasiado próximos a un arroyo. En otra, se canalizó un arroyo a través de una calle y no por debajo de ella. "La plantación de pinos a partir de 1989... redujo severamente el flujo natural del agua en los arroyos", le dijo a Woodmark un granjero vecino de una de las plantaciones de Sappi. En los últimos siete años las plantaciones de Sappi fueron dañadas por "incendios devastadores".

Los inspectores de Woodmark visitaron una zona que estaba siendo talada, donde se estaba realizando tala rasa en una extensión de más de 40 hectáreas. Encontraron que no existían equipos de primeros auxilios, ni una zona designada para equipos y provisiones, ni equipos para combatir incendios. A los trabajadores tampoco se les proporcionaba agua potable. No había registros de capacitación previa de los trabajadores ni programas de entrenamiento para 2006. Para una plantilla de 120 trabajadores, el contratista solo contaba con dos técnicos en primeros auxilios cuyos certificados estaban vencidos.

De una zona de depósito perteneciente a uno de los contratistas se filtraba aceite. La construcción del pozo separador del aceite no cumplía con los requisitos de Sappi. Un operador del depósito químico no estaba capacitado en temas sanitarios y de seguridad para manejar químicos tóxicos. No todos los contratistas contaban por escrito con procedimientos laborales seguros, incluidos los riesgos y peligros asociados con las diversas tareas.

Para solucionar estos incumplimientos de las normas del FSC, Woodmark presentó una serie de pedidos de acciones correctivas que Sappi debe cumplir antes de la próxima visita de Woodmark a Swazilandia, en julio de 2007.

Pero la parte más impactante del informe de Woodmark sobre la evaluación de Sappi es la revelación de que Sappi utiliza plaguicidas que están prohibidos en operaciones certificadas por el FSC.

En noviembre de 2005, durante una evaluación previa de las operaciones de Sappi en Swazilandia, Woodmark halló que Sappi utilizaba dos plaguicidas prohibidos por la Política de Plaguicidas Químicos, 2002, del FSC. Woodmark presentó una solicitud de acción correctiva de parte de Sappi que asegurara que "no se utilicen plaguicidas con benomyl e imazapyr como ingrediente activo". Sappi dejó de utilizar el imazapyr, pero continuó empleando el benomyl.

El benomyl es un fungicida que es tóxico de manera selectiva para microorganismos e invertebrados. Sappi reconoce que es "muy tóxico para peces y lombrices de la tierra". La empresa emplea el benomyl contra el *fusarium circinatum*, un hongo que causa el llamado pitch canker (o cáncer del pino) en los pinos. En diciembre de 2005, el FSC emitió una nueva Política de Plaguicidas. En la Política de Plaguicidas Químicos de 2002 y 2005 el benomyl está incluido como un plaguicida "altamente peligroso".

La Política de Plaguicidas de 2005 del FSC establece que "el empleo de todo plaguicida que contenga un ingrediente activo en la presente lista de plaguicidas 'altamente peligrosos' del FSC constituirá un incumplimiento importante" de las normas del FSC "y por lo tanto será prohibido a menos que la Junta de Directores del FSC haya aprobado previamente una derogación temporal [o dispensa parcial de las reglas] para su uso en el territorio aplicable" [traducción no oficial].

Woodmark decidió no sólo forzar las reglas sino desestimarlas del todo. En lugar de esperar y ver si el FSC aprobaría el uso del benomyl en Swazilandia, Woodmark expidió el certificado a Sappi con el argumento de que "se presentó una solicitud de derogación del uso del benomyl". A marzo de 2007 el FSC aún no había autorizado la solicitud de derogación del benomyl, pero el certificado de Sappi en Swazilandia sigue vigente.

Woodmark certificó los monocultivos de Sappi en parte motivada en la esperanza de futuras mejoras, pero también motivada en la esperanza de que en el futuro se debilite la Política de Plaguicidas del FSC. Al expedir el certificado y permitir que continúe vigente, Woodmark socava la credibilidad tanto del FSC como de Soil Association.

Por Chris Lang, email: chrislang@t-online.de, www.chrislang.blogspot.com

[inicio](#)

AGROCOMBUSTIBLES

- El etanol extraído de árboles: un remedio peor que la enfermedad

El etanol es un biocombustible que se obtiene principalmente del maíz o la caña de azúcar. Se lo promociona con entusiasmo como un combustible alternativo que puede incorporarse a la gasolina común o quemarse directamente en motores especiales de combustión "multiflex".

Ahora, en la actual carrera por los agrocombustibles, la idea de utilizar árboles para producir etanol se presenta como la mejor solución. Sus defensores sostienen que el "treethanol" (del inglés tree: árbol) tiene el potencial de ser mucho más eficiente en materia de energía que otros cultivos, como el maíz o la caña de azúcar. El departamento de Energía de Estados Unidos calcula que el balance energético (la relación entre la energía producida por una cantidad dada de etanol y la energía necesaria para producirla) del etanol obtenido del maíz representa 1,3; en otras palabras, el etanol produce 30% más de energía que la necesaria para su producción. En el caso del etanol obtenido de la caña de azúcar en Brasil, el balance energético es de 8,3, según la Agencia Internacional de Energía. Pero en el caso del etanol obtenido de los árboles, que contienen gran cantidad de celulosa, se afirma que el balance energético asciende a 16, al menos en teoría. En la práctica, la producción de etanol "celulósico" resulta mucho más difícil y cara que la producción procedente de otros cultivos. Pero los investigadores de las grandes compañías compiten por desarrollar formas rápidas y económicas de convertir en astillas, fermentar, destilar y refinar la madera.

El interés por el etanol celulósico crece a medida que se aprecian los inconvenientes de la producción de etanol a partir del maíz y la caña de azúcar. Estos últimos son importantes cultivos de alimentos, y a medida que aumenta la producción de etanol en el mundo, la mayor demanda sube los precios de productos como el pienso para el ganado, las bebidas cola y las galletas. El precio del maíz subió 70% entre septiembre de 2006 y enero de 2007, hasta alcanzar su mayor nivel en una década. El presidente mexicano Felipe Calderón llegó a ponerle un tope al precio de las tortillas de maíz en enero, ya que el rápido crecimiento de la industria del etanol en Estados Unidos hizo que se dispararan los precios.

Aquí es donde aparecen los árboles. Los defensores del etanol obtenido de árboles argumentan que los árboles crecen todo el año y contienen muchos más hidratos de carbono (los precursores químicos del etanol) que los cultivos de alimentos. El etanol es consecuencia de la fermentación de azúcares, motivo por el cual se puede extraer con tanta sencillez y eficacia de la caña de azúcar. La extracción de etanol del maíz es un poco más complicada: la harina producida de los granos molidos se mezcla con agua y se agregan encimas para transformar los hidratos de carbono del maíz en azúcares, que luego pueden fermentarse para producir etanol. Sin embargo, la producción de etanol a partir de materia prima celulósica es aun más compleja ya que implica separar las duras y sinuosas cadenas de celulosa y hemicelulosa de la pared celular de las plantas para liberar los azúcares. Esto se puede lograr mediante un cóctel de cinco o seis enzimas. Estas enzimas existen, pero son caras.

Sin embargo, los entusiastas del etanol procedente del árbol ven que hay mucho dinero para ganar y procuran hallar soluciones. En primer lugar, buscan enzimas más baratas y eficientes. Dos grandes productores de

enzimas industriales (Genencor, una firma de Estados Unidos, y Novozymes, de Dinamarca) trabajan para reducir el costo de las enzimas celulasas, que pueden separar la celulosa, a menos de \$0,10 por galón de etanol. Por su parte, Diversa está desarrollando enzimas capaces de separar la hemicelulosa. Un método es el de "manipular la estructura" de las enzimas existentes (o sea, la manipulación genética de las enzimas) para lograr una mayor eficiencia. Otro método es el de la "bioexploración" (o sea, la biopiratería), que implica buscar enzimas naturales en lugares poco comunes, como los estómagos de las termitas que comen madera.

Para que el negocio sea aun más redituable -- y para empeorar las cosas --, una segunda "solución" (probablemente complementaria) es la creación de árboles nuevos. Un equipo dirigido por el biólogo Vincent Chiang, de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, investiga la producción de etanol a partir de árboles genéticamente modificados, con fondos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

El equipo intentará lograr árboles de crecimiento más rápido con menos contenido de lignina y más celulosa para que crezcan más rápidamente y también produzcan más etanol. En Estados Unidos se están probando árboles transgénicos de este tipo. El Dr. Chiang y su equipo también buscan formas de manipular los genes que determinan la estructura de las hemicelulosas del árbol que contienen azúcar, para lograr una mayor eficiencia de los procesos de separación y fermentación.

Lo que estos investigadores de alta tecnología ni siquiera toman en cuenta (como suele ocurrir) son los costos ambientales y sociales que generaría la expansión a gran escala de las plantaciones de árboles genéticamente modificados para producir combustibles: la sustitución de cultivos de alimentos por cultivos para combustibles (en este mundo donde millones de personas padecen desnutrición), el desplazamiento y el empobrecimiento de las comunidades locales (y la represión relacionada), las consecuencias para el agua, los ecosistemas, la tierra. Estos impactos casi seguramente recaerán en gran parte sobre las comunidades del Sur, donde se instalarían la mayoría de esas plantaciones. Al mismo tiempo, también se ignoran las graves amenazas ambientales que implica la manipulación genética de los árboles (ver Boletín N° 88 de WRM) y las enzimas.

Quienes promocionan el etanol obtenido de árboles y otros agrocombustibles no han respondido aún un sencillo interrogante: ¿la solución de un problema (cambio climático) podrá considerarse solución si genera graves problemas para otros problemas de igual importancia? Los cultivos destinados a agrocombustibles y las plantaciones de árboles para etanol a gran escala provocarán pérdida de biodiversidad, falta de agua, degradación de la tierra, empobrecimiento, desnutrición, violaciones de los derechos humanos, para nombrar solo las consecuencias más evidentes. Nuestra respuesta a la pregunta es que ésta es una solución inaceptable que es necesario resistir.

Fuente utilizada: "Energy: Could new techniques for producing ethanol make old-fashioned trees the biofuel of the future?", Derek Bacon, marzo de 2007, The Economist Newspaper, enviado por STOP Genetically Engineered Trees Campaign, e-mail: info@stopgetrees.org, <http://www.stopgetrees.org>

inicio

- Brasil: los agrocombustibles representan un nuevo ciclo de expansión de la devastación de las regiones amazónicas y del Cerrado

La actual matriz energética está constituida básicamente por petróleo (35%), carbón vegetal (23%) y gas natural (21%). Las naciones de la OCDE – la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –, que son responsables del 56% del consumo energético del planeta, necesitan desesperadamente un sustituto en forma de combustible líquido para el petróleo. Se prevé que las tasas de extracción de petróleo alcancen un pico este año y que el suministro mundial decrezca significativamente en los próximos cincuenta años.

La Administración Bush está comprometida con ampliar considerablemente los agrocombustibles para reducir su dependencia del petróleo importado (Estados Unidos importa el 61 % del petróleo crudo que consume). Aunque existe una gama de previsiones para los agrocombustibles, el etanol, derivado del maíz y de la soja, constituye actualmente el 99 % de la totalidad del uso de los agrocombustibles en los Estados Unidos.

La energía que contienen los granos o plantas es en realidad una metamorfosis agroquímica de la energía solar que a través del aceite vegetal o del alcohol se transforma en combustible – biodiesel y etanol. Las mejores condiciones para este proceso existen en los países del Sur, donde es mayor la incidencia de la energía solar.

La producción de combustibles a partir de semillas de girasol, de maíz, soja, almendra, palma africana o caña de azúcar se presenta como una buena intención -- sustituir el petróleo, un combustible contaminante y no renovable, por combustibles renovables -- que contará con amplia publicidad porque se presentará como un gesto de buena voluntad para frenar el calentamiento de la atmósfera.

Pero la supuesta "solución" apunta a dejar intacto el modelo actual de derroche de energía y transporte individual, un modelo que debe ser sustituido por uno basado en el transporte colectivo. La crisis energética ha proporcionado una oportunidad para la formación de poderosas alianzas mundiales entre las empresas petroleras, las de granos, de ingeniería genética y la industria automotriz. Estas nuevas alianzas están decidiendo el futuro de los paisajes agrícolas del mundo. El auge de los agrocombustibles consolidará aún más su dominación sobre nuestros alimentos y sistemas de combustibles y les permitirá determinar qué se produce, cómo y en qué cantidad, con el resultado de más pobreza rural, más destrucción ambiental y más hambre. Los beneficiarios finales de la revolución de los agrocombustibles serán los megacomerciantes de granos, entre ellos Cargill, ADM y Bunge; las empresas petroleras como BP, Shell, Chevron, Neste Oil, Repsol y Total; las empresas automotrices como General Motors, Volkswagen AG, FMC-Ford France, PSA Peugeot-Citroën y Renault; y los gigantes de la biotecnología como Monsanto, DuPont y Syngenta.

En una iniciativa impulsada por el gobernador del Estado de Florida, Jeb Bush, el ex ministro de Agricultura del Brasil, Roberto Rodrigues y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Moreno, se lanzó en Miami la Comisión Interamericana de Etanol. Por otro lado, la gira latinoamericana de Bush realizada en marzo de este año por Brasil, Uruguay, Colombia, Guatemala y México, se propuso lograr que los gobiernos de la región promuevan la producción en gran escala de agrocombustibles -- como el alcohol de caña de azúcar y el etanol de maíz -- para exportarlos al mercado estadounidense. El objetivo es que sean los países del sur quienes concentren su agricultura en la producción de combustible para abastecer a los automotores del primer mundo y que de esa forma éste no dependa del petróleo que importa de países que le resultan "problemáticos" (como Venezuela, Irán, Irak, Nigeria, Arabia Saudita y Angola).

Todo esto ha de fortalecer la relación comercial entre Brasil y los Estados Unidos, ya el mayor importador de etanol brasileño -- importó el 58 % del total producido por esta nación en 2006. Lejos de significar una buena noticia para Brasil, si la caña de azúcar brasileña cumpliera los niveles de combustible renovable para etanol propuestos por la administración Bush, Brasil necesitaría aumentar su producción unos 135 mil millones de litros más por año.

Dado el nuevo contexto energético global, los políticos e industriales brasileños están formulando una nueva visión del futuro económico del país, centrada en la producción de fuentes de energía para sustituir un diez por ciento del uso mundial del petróleo en los próximos 20 años. Esto requerirá cinco veces más tierras dedicadas a la producción de azúcar, pasando de 6 a 30 millones de hectáreas.

Y no sólo la producción de azúcar, sino de soja y otros cultivos potencialmente energéticos. Como respuesta, sólo en Brasil es probable que se deforesten unos 60 millones de hectáreas en el futuro cercano. Los nuevos cultivos ocuparán nuevas superficies que probablemente implicarán una deforestación comparable a la de la región de Pernambuco, donde sólo queda un 2,5% de la cobertura boscosa original.

Los agrocombustibles están iniciando un nuevo ciclo de expansión y devastación en la región del Cerrado, donde la superficie plantada está en rápida expansión y donde se prevé que para el año 2030 ya no quedará nada de su cobertura vegetal natural. También está amenazada la Amazonía. El ingeniero químico brasileño Expedito Parente, propietario de la primera patente registrada en el mundo para producir biodiesel a nivel industrial, declaró: "Tenemos 80 millones de hectáreas en la Amazonía que van a transformarse en la Arabia Saudita del biodiesel".

En la actualidad, el 85% del total de soja producida en Brasil procede de cinco Estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás y Rio Grande do Sul, aunque en las zonas del norte del país (Rondonia, Pará, y Roraima) se registran últimamente avances impresionantes. El total de la tierra utilizada para el cultivo de la soja ha aumentado por un factor de 57 desde 1961 y el volumen de producción se ha multiplicado 138 veces. El cincuenta y cinco por ciento de la cosecha de soja, es decir 11,4 millones de hectáreas, es de soja transgénica. En esa dirección apunta también el plan de desarrollo "Avança Brasil", que busca extender la frontera agrícola penetrando a profundidad en la zona de bosques para fomentar el cultivo de la soja y al que el Gobierno proyecta destinar unos 40 mil millones de dólares. El presidente Lula ha declarado que la soja transgénica se utilizará para los agrocombustibles y la "soja buena" para consumo humano.

El cultivo de la soja ya ha provocado la deforestación de 21 millones de hectáreas de bosques en Brasil y ha convertido grandes superficies de la Cuenca Amazónica en tierra infértil. Los suelos pobres necesitan mayor aplicación de fertilizantes industriales para lograr niveles competitivos de producción. Se han abandonado al pastoreo de ganado cien mil hectáreas de tierras agotadas, donde antes se cultivaba soja, lo que conduce a todavía mayor degradación del suelo. Además, la expansión de la soja lleva a niveles extremos de concentración de tierras e ingresos. En Brasil, el cultivo de la soja desplaza a once trabajadores agrícolas por cada trabajador nuevo que emplea. Esto no es un fenómeno nuevo; en los años setenta, 2,5 millones de personas fueron desplazadas por la producción de soja en Paraná y 300.000 fueron desplazados en Río Grande del Sur. Muchos de estos nuevos Sin Tierra han emigrado a la Amazonía, donde han deforestado bosques primarios.

El avance de la "frontera agrícola" para agrocombustibles es un atentado contra la soberanía alimentaria de los países del Sur, ya que la tierra para la producción agrícola se está dedicando en forma creciente para alimentar los autos de las personas del Norte. La cantidad de cereales que se necesita para llenar un tanque de casi 100 litros con etanol una sola vez alcanza para alimentar a una persona durante un año entero. La producción de agrocombustibles también afecta a los consumidores en forma directa, al aumentar el costo de los alimentos.

Únicamente las alianzas estratégicas y la acción coordinada de los movimientos sociales (organizaciones de agricultores, movimientos ambientales y de trabajadores agrícolas, ONGs, grupos de consumidores, miembros comprometidos del sector académico, etc.) podrán ejercer presión sobre los gobiernos y las empresas multinacionales para asegurar que estas tendencias se detengan. Se requiere trabajo conjunto para garantizar que todos los países mantengan su derecho a lograr la soberanía alimentaria a través de sistemas de producción local con base agroecológica, reforma agraria, acceso al agua, a las semillas y a otros recursos, y de políticas agrícolas y alimentarias nacionales que respondan a las necesidades genuinas de los agricultores y los consumidores.

Artículo basado en: "O Mito dos Biocombustíveis", Edivan Pinto y Marluce Melo, Comisión Pastoral de la Tierra Regional Nordeste – CPT NE, y Maria Luisa Mendonça, Red Social de Justicia y Derechos Humanos, 23 de febrero de 2007; "The ecological and social tragedy of crop-based biofuel production in the Americas", Miguel A Altieri, Elizabeth Bravo, versión completa (en inglés) en <http://www.wrm.org.uy/subjects/biofuels.html#analytical>; "Estados Unidos y Brasil: La nueva alianza etanol", Raúl Zibechi, http://www.wrm.org.uy/temas/Biocombustibles/Alianza_Etanol.html; El mito de los biocombustibles, Edivan Pinto, Marluce Melo y Maria Luisa Mendonça, Agencia Latinoamericana de Información – ALAI, marzo de 2007, enviado por Biodiversidad en América Latina <http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/30737>; "Biodiesel... o biotrampa?" 2006, <http://www.iccc.es/2006/08/07/biodiesel-o-biotrampa/#pp0>.

COMERCIO DE CARBONO

- Lo indecente del comercio de carbono

Si lo que se pretende es frenar el cambio climático, el comercio de carbono no es la solución.

En 1992, una tristemente célebre nota filtrada a la prensa escrita por Lawrence Summers, entonces economista jefe del Banco Mundial, señalaba que "la lógica económica de deshacerse de los residuos tóxicos en los países de salarios más bajos es impecable, y deberíamos afrontarla".

En estos momentos se está intentando imponer un tipo de ecologismo de libre mercado muy parecido, que reduce debates muy complejos a una mera discusión sobre cifras y gráficos que ignora variables imposibles de cuantificar, tales como la pérdida de vidas humanas, la extinción de especies y la agitación social.

Puede que los análisis de costos-beneficios sean una herramienta útil para tomar decisiones en situaciones relativamente simples o cuando hay un número limitado de opciones sencillas entre las que elegir. Pero tal como observa Tom Burke, profesor visitante en el Imperial College London: "lo cierto es que aplicar análisis de costos-beneficios a cuestiones como el cambio climático no es más que economía basura (...) Es vanidoso por parte de los economistas creer que todas las opciones se pueden reducir a un conjunto de cálculos de valor monetario".

Algunos comentaristas han aplaudido el Informe Stern, un importante estudio publicado por el Gobierno británico en diciembre de 2006, por hablar en la jerga económica que entienden los políticos y la comunidad empresarial. Pero al encuadrar el problema únicamente en términos de precios, comercio y crecimiento económico, estamos restringiendo el alcance de la respuesta ante el cambio climático a soluciones basadas en el mercado.

Estas "soluciones" suelen adoptar dos formas:

- el comercio de emisiones, un sistema por el que los Gobiernos otorgan permisos a grandes contaminadores industriales para que puedan comerciar con "derechos de contaminación" entre sí, según sus necesidades;
- la generación de excedentes de créditos de carbono a través de proyectos, normalmente ubicados en países del Sur, que afirman reducir o evitar emisiones en otros lugares; estos créditos se pueden adquirir para compensar cualquier falta en la reducción de emisiones.

Así, estos sistemas nos permiten eludir la respuesta más eficaz que se podría dar al cambio climático: dejar los combustibles fósiles en el subsuelo. Evidentemente, no se trata de una propuesta sencilla para nuestra sociedad, muy dependiente de dichos combustibles; sin embargo, todos sabemos que eso es precisamente lo que se necesita.

Por lo tanto, ¿qué incentivo hay para empezar a emprender estos costosos cambios a largo plazo cuando uno se puede limitar a comprar créditos de carbono, más baratos, a corto plazo?

En el actual contexto económico neoliberal, las normas del comercio sucumben inevitablemente ante las presiones del cabildeo de las grandes empresas y la falta de regulación a fin de garantizar que los Gobiernos no "interfieran" en el fluido funcionamiento del mercado.

Ya hemos presenciado esa corrosiva influencia en el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) de la Unión Europea, cuando, sometidos a una intensa presión empresarial, los Gobiernos adjudicaron permisos de emisiones en exceso a

las industrias más contaminantes en la ronda inicial. Esto provocó una caída en el precio del carbono superior al 60%, con lo que se desincentivó aún más a las industrias a reducir sus emisiones en el origen.

La industria cuenta con todo tipo de lagunas jurídicas e incentivos para exagerar sus emisiones con el fin de obtener más permisos y, por lo tanto, tomar aún menos medidas.

El analista de mercados Franck Schuttellar calcula que, durante el primer año de funcionamiento del sistema, las industrias más contaminantes del Reino Unido ganaron, en conjunto, 940 millones de libras (1.373 millones de euros) en beneficios imprevistos gracias a las generosas asignaciones del ETS.

Teniendo en cuenta todo lo que sabemos sobre el vínculo entre contaminación y cambio climático, esa gran concesión pública a empresas muy poco limpias raya lo indecente.

Se nos pide que confiemos en que la flexibilidad y la eficiencia del mercado garantizarán que las emisiones de carbono se reduzcan de la forma más rápida y eficaz posible, mientras que la experiencia nos demuestra que la falta de una normativa estricta tiende a crear problemas ambientales, no a resolverlos. Hay toda una corriente de opinión que defiende que la "mano invisible" del mercado no es la forma más eficaz de afrontar el cambio climático.

La Declaración de Durban sobre justicia climática, suscrita por organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, manifiesta que convertir el carbono en una mercancía representa una privatización a gran escala de la capacidad de la Tierra para reciclar carbono. El pastel atmosférico se reparte y se entrega a los mayores contaminadores del mundo.

Una acción eficaz frente al cambio climático exigiría reivindicar, adoptar y respaldar políticas que reduzcan las emisiones en su origen, y no un sistema para compensarlas o comerciar con ellas. El comercio de carbono no es la respuesta; las emisiones se deben reducir de forma general, sin sutiles cláusulas de salvaguardia para los principales contaminadores. Urge aplicar una regulación, una supervisión y multas más estrictas a los contaminadores, en el ámbito comunitario, local, nacional e internacional, así como apoyar activamente a las comunidades afectadas por el cambio climático. En estos momentos, esas políticas son prácticamente invisibles, ya que van en contra de las vacas sagradas del crecimiento económico y el libre mercado.

Lamentablemente, cuando se trata de abordar el cambio climático y mantener un crecimiento económico basado en la permanente y creciente extracción y consumo de combustibles fósiles no hay soluciones de aquellas en que "todo el mundo sale ganando".

Los mecanismos basados en el mercado, como el comercio de carbono, representan una ingeniosa estratagema de contabilidad creativa que desvía la atención del hecho de que no hay un escenario "convencional" viable.

Las políticas sobre cambio climático deberían ser algo mucho más serio.

Por Kevin Smith, Justicia Medioambiental, un programa de Transnational Institute (TNI), correo electrónico: kevin@carbontradewatch.org.

[inicio](#)

Boletín Mensual del Movimiento Mundial por los Bosques
Este boletín también está disponible en inglés, francés y portugués
Editor: Ricardo Carrere

Movimiento Mundial por los Bosques
Maldonado 1858 - 11200 Montevideo - Uruguay
tel: 598 2 413 2989 / fax: 598 2 410 0985
wrm@wrm.org.uy
<http://www.wrm.org.uy>

